



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

| | |
|---------------------|--|
| Proceso: | Ordinario Laboral |
| Radicación: | 05001-31-05-014-2021-00321-01 |
| Demandante: | Miriam Molina Ariza |
| Demandado: | Colpensiones |
| Asunto: | Consulta |
| Procedencia: | Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín |
| Magistrada ponente: | Sandra María Rojas Manrique |
| Temas: | Reliquidación pensión, sumatoria de tiempos públicos |

Medellín, agosto once (11) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de mayo del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MIRIAM MOLINA ARIZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Radicado 05001-31-05-014-2021-00321-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MIRIAM MOLINA ARIZA, convocó a juicio a COLPENSIONES, pretendiendo se declare que, por pertenecer al régimen de transición, le asiste derecho a que todos los tiempos cotizados, le sean tenidos en cuenta para la liquidación de su pensión de vejez; se ordene la reliquidación de la pensión, desde el momento en que se causó, aplicando una tasa de reemplazo del 72%; se reconozcan intereses moratorios o indexación.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que mediante Resolución GNR 184341 del 2015, la accionada le concedió la pensión de vejez a la actora, a partir del 3 de noviembre del 2011, en cuantía de \$1.175.847, aplicando el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 66%, sobre un IBL de \$1.781.587 y 958 semanas, explicando que, de las semanas referidas, 884 fueron cotizadas a la demandada y 74 fueron laboradas al servicio del Municipio de Medellín, entre el 24 de septiembre de 1979 y el 31 de marzo de 1981, tiempo que no fue tenido en cuenta por Colpensiones, al reconocer la pensión de vejez. Agregó que se solicitó la reliquidación pensional, la que fue negada por Resolución SUB 276325 del 2020, argumentando la prohibición de realizar sumatoria de tiempos.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que la liquidación de la pensión de vejez realizada a la actora, se efectuó conforme a la normatividad vigente.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; improcedencia de intereses moratorios; imposibilidad de condena en costas; inexistencia de la obligación de reconocer indexación; prescripción; compensación indexada y la innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 26 de mayo del año 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que a la demandante le asiste derecho al reajuste de la pensión de vejez, incluyendo los tiempos públicos y privados, a partir del 15 de diciembre del 2017; reconoció como retroactivo del reajuste de la pensión de vejez, desde el 15 de diciembre del 2017 y hasta mayo del 2022, \$19.936.594, ordenando que a partir del 1º de junio del 2022, se reconozca una mesada por valor de \$2.161.038; condenó a la demandada a pagar la indexación del retroactivo, ordenando los descuentos en salud; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y parcialmente probada la de prescripción, condenando en costas a Colpensiones.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, ninguno de los apoderados efectuó pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que por medio de la Resolución GNR 184341 del 21 de junio del 2015, se le reconoció la pensión de vejez a la actora, a partir del 3 de noviembre del 2011, en cuantía de \$1.175.847, prestación que fue ingresada en nómina de julio del 2015, que se cancela a partir de agosto de la misma anualidad - ver folios 11 a 17 del anexo 03 del expediente digital-.
- Que por Resolución SUB 276325 del 21 de diciembre del 2020 se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez solicitada por la actora - ver folios 22 a 28 del anexo 03 del expediente digital-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si tiene derecho la demandante, a que se le reliquide la pensión de vejez, teniendo en cuenta la sumatoria de los tiempos públicos laborados sin cotización al ISS y los tiempos privados efectivamente cotizados, bajo los supuestos consagrados en el Decreto 758 de 1990?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) es procedente reliquidar la pensión de vejez de la demandante, con una tasa de reemplazo del 72%, teniendo en cuenta en el total de semanas incluida la sumatoria del tiempo público no cotizado, conforme al régimen de transición pensional y el Decreto 758 de 1990, no obstante el valor de la mesada no corresponde a la establecida por a quo, en consecuencia, la providencia deberá ser MODIFICADA en su numeral segundo, en el sentido de indicar que el valor del retroactivo a reconocer por parte de la demandada, por reajuste de la pensión de vejez, asciende a \$8.893.242, así como que a partir del 1º de agosto de la presente anualidad, se deberá continuar reconociendo a la accionante una mesada por valor de \$1.945.734, CONFIRMÁNDOLA en las demás partes.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

De la reliquidación de la pensión de vejez, aplicando la sumatoria de tiempo público

La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-769 de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, compendia la línea jurisprudencial, construida de tiempo atrás, según la cual, es procedente la acumulación de acumular cotizaciones y tiempo de servicios en el sector público, con el fin de reconocer una pensión de vejez en aplicación del régimen de transición, Acuerdo 049 de 1990.

Debe recordarse que la unificación que realiza la Sala Plena, en la sentencia citada, no se da respecto de la procedencia de la sumatoria, criterio uniforme y pacífico en el Tribunal Constitucional, sino respecto de la posibilidad de la misma, con relación al requisito de las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional.

En la referida sentencia se expone:

“Como ya se mencionó, reiterada Jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sostenido que las personas cotizan y por consiguiente, cumplen los requisitos ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no ante las entidades específicas que lo componen.

Justamente en aplicación de esta tesis, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido expresamente que (i) ‘el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales’ por lo que se incurre en un error al interpretar esta norma de manera distinta a lo que realmente se encuentra establecido en ella y (ii) en virtud del principio hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, es posible computar las semanas que cotizó una persona en el sector público antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado del sector privado en cualquier tiempo ”.

... “En jurisprudencia más reciente la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que laboró 405 semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de Seguros Sociales, para un total de 1001, a quien le fue negada la pensión de vejez por no ser posible, según esa entidad, acumular tiempos de servicio bajo el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100 de 2012, consideró:

“[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición.

Esto por cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto) y estableció que ‘[L]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley’, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas”.

En la misma dirección la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su nueva integración, en providencias CSJ SL1947-2020

y CSJ SL1981-2020, proferidas el 01 de julio de 2020, cambió la postura que venía sosteniendo inveteradamente en torno a la improcedencia de la sumatoria de tiempo público no cotizado, a efectos del reconocimiento de pensiones reguladas por el Decreto 758 de 1990, para propugnar la viabilidad de la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del régimen de transición.

A su vez en sentencia SL 2557 (72425) del 08 de julio de 2020, magistrado ponente doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, la Sala Laboral de la citada Corporación, admite la procedencia de la referida acumulación de tiempos, para efectos de la reliquidación pensional en los siguientes términos:

“La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultractiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad(...).

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante...”

Así las cosas, encuentra esta Sala de Decisión que, en acatamiento del precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debe acoger la tesis de la procedencia de la reliquidación de las pensiones de vejez, reconocidas bajo el amparo del régimen de transición, aplicando para ello, la sumatoria de tiempos públicos y privados.

2.6. CASO CONCRETO

En el asunto bajo estudio, no hay discusión alguna en torno a que la señora Miriam Molina Ariza, es beneficiaria del régimen de transición pensional contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con 37 años de edad, en tanto que nació el 3 de noviembre de 1956 y así lo reconoció Colpensiones en la Resolución GNR 184341 de 2015.

Ahora, en vista de que la demandante cuenta con 962.43 semanas (884.43 semanas cotizadas en Colpensiones y 78 semanas públicas) laboradas en toda su vida laboral, sumando los tiempos públicos y privados, es claro, que la tasa de reemplazo a aplicar, debe de ser del 72%, conforme lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, tal y como lo estableció el a quo.

En cuanto al IBL, el Juzgado liquidó el de los últimos 10 años en \$1.978.728, al que le aplicó una tasa de reemplazo del 72%, obteniendo una mesada para el 2011 de \$1.424.684, procediendo esta Sala a realizar las operaciones de rigor, encontrando que dicho IBL asciende a la suma de \$1.764.465, siendo incluso inferior al reconocido por Colpensiones en \$1.781.587, sin poder establecer a que corresponden las diferencias, respecto de la liquidación realizada por el Juez, por cuanto la misma no fue incorporada al expediente digital.

Por lo antes expuesto y por resultar más favorable a los intereses de la actora, se trabajará con el IBL liquidado por Colpensiones en la resolución que le reconoció la pensión de vejez y que se estableció en la suma de \$1.781.587, al que se le aplica una tasa de reemplazo del 72%, encontrando que la mesada a reconocer, a partir del 3 de noviembre del 2011, debió ascender a \$1.282.743.

La reliquidación de la pensión se causa a partir del 15 de diciembre del 2017, como se estableció en la providencia que se revisa, habiendo prosperado de manera parcial la excepción de prescripción, por cuanto el mismo día y mes, pero del año 2020, se elevó la reclamación administrativa a Colpensiones, solicitando lo hoy pretendido.

En consecuencia, el retroactivo generado por el reajuste pensional, es el siguiente:

| REAJUSTE PENSIONAL | | | | | | |
|--------------------|-------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Año | IPC | Valor reconocido | Valor real | Diferencia mensual | # mesadas | Total retroactivo |
| 2017 | 4,09% | \$ 1.490.769 | \$ 1.626.294 | \$ 135.525 | 16 días | \$ 72.280 |
| 2018 | 3,18% | \$ 1.551.741 | \$ 1.692.809 | \$ 141.068 | 13 | \$ 1.833.890 |
| 2019 | 3,80% | \$ 1.601.086 | \$ 1.746.641 | \$ 145.554 | 13 | \$ 1.892.207 |
| 2020 | 1,61% | \$ 1.661.928 | \$ 1.813.013 | \$ 151.085 | 13 | \$ 1.964.111 |
| 2021 | 5,62% | \$ 1.688.685 | \$ 1.842.203 | \$ 153.518 | 13 | \$ 1.995.733 |
| 2022 | | \$ 1.783.589 | \$ 1.945.734 | \$ 162.146 | 7 | \$ 1.135.022 |
| TOTAL | | | | | | \$ 9.217.536 |

Colofón de lo anterior, se modificará la providencia, en el sentido de condenar a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante, la suma de \$9.217.536, como retroactivo generado por el reajuste pensional comprendido entre el 15 de diciembre del 2017 y el 31 de julio del año 2022, así mismo, deberá continuar reconociendo una mesada pensional en cuantía de \$1.945.734 a partir del 1° de agosto del año 2022.

Finalmente, se encuentra ajustada a derecho la autorización dada a Colpensiones, a efectos que realice los descuentos en salud respecto de los montos a reconocer al actor, por concepto de reliquidación de la pensión de vejez; asimismo resulta procedente la condena impuesta por concepto de indexación, al ser un instrumento para actualizar la condena.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de mayo del 2022, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora MIRIAM MOLINA ARIZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el sentido de indicar que el valor del retroactivo a reconocer por parte de la demandada, por concepto de reajuste de la pensión de vejez, asciende a la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (9.217.536), así como que a partir del 1° de agosto de la presente anualidad, se deberá continuar reconociendo a la accionante una mesada pensional por valor de \$1.945.734.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO